



La consulta plantea diferentes cuestiones relativas al acceso y posibilidad de comunicación de diferentes datos de carácter personal referidos a la plantilla de funcionarios por la corporación municipal a la organización sindical consultante y su adecuación a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

Con carácter previo, conviene señalar que, en la consulta viene planteada por un Delegado sindical de un determinado sindicato, sin informar si el mismo tiene representación en los órganos de representación sindical del Ayuntamiento al que se solicitan los datos, razón por la cual solo procederá la cesión de datos a dicha sección sindical en caso de que sus representantes formen parte de los órganos de representación del personal en el citado Ayuntamiento o, en su defecto, cuando los trabajadores hayan prestado su previo consentimiento a la misma.

Sentados así los términos, como regla general, la cesión de los indicados datos por parte del Ayuntamiento a una organización sindical con representatividad en el mismo supone una cesión de datos de carácter personal disponiendo el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

Entre las excepciones a la necesidad de ese consentimiento recogidas en el artículo 11.2 se encuentra el que la cesión se encuentre autorizada por una Ley.

En la materia que nos ocupa, al tratarse de datos relativos a la plantilla de personal funcionario de una corporación municipal, se analizará la cuestión desde el supuesto en que el personal se encuentre vinculado a la corporación municipal por una relación estatutaria de derecho administrativo, es decir, que dicho personal tenga la condición de personal funcionario.

En este supuesto, la Ley 9/1987, 12 de junio de 1987, de Regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación de los funcionarios públicos, enumera en su artículo 9, las funciones atribuidas a las Juntas de Personal, incluyéndose entre las mismas, no sólo la recepción de información, sino también, “tener conocimiento y ser oídos en las siguientes cuestiones y materias: a) Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo. b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias. c) Cantidades que perciba cada funcionario por complemento de productividad”



(artículo 9.4); “conocer, al menos, trimestralmente, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del ambiente y las condiciones de trabajo, así como de los mecanismos de prevención que se utilicen.” (artículo 9.5); “vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguridad social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes” (artículo 9.6) y “vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo” (artículo 9.7).

En informes emitidos por esta Agencia Española de Protección de Datos ante cuestiones similares a las planteadas en la consulta, en relación con personal funcionario, esta Agencia ha señalado lo siguiente:

*“Con carácter preliminar debe precisarse que la comunicación de cualquier dato de los anteriormente indicados, en cuanto incorpore la identificación de cualquier persona física o se refiera a cualquier información personal correspondiente a las mismas, implica, a los efectos de la Ley 15/1999, una cesión de datos de carácter personal (que se define en el artículo 3 i) de la misma “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”, que regula en el artículo 11.1 estableciendo: “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.*

*Entre las excepciones a la necesidad de ese consentimiento recogidas en el artículo 11.2 se encuentra el que la cesión se encuentre autorizada por una Ley.*

*En este sentido, considerando el ámbito subjetivo referido a personal funcionario de una Administración Pública al que hace referencia la consulta, la Ley 9/1987, 12 de junio de 1987, de Regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación de los funcionarios públicos, en su artículo 9 enumera, como señala la consulta planteada, las funciones atribuidas a las Juntas de Personal, incluyéndose entre las mismas, no sólo la recepción de información, sino también “vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguridad social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes” (artículo 9.6) y “vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo” (artículo 9.7).*



*Por su parte, el artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece el carácter público de las Relaciones de Puestos de Trabajo, si bien las mismas, no contendrán, a la vista del contenido exigido por el artículo 15.1 b), los datos del personal concreto que ocupe un determinado puesto de trabajo, sino exclusivamente las características de cada uno de los puestos de trabajo existentes en cada Dependencia Administrativa, siendo los datos personales referidos a cada funcionario público, de acceso restringido a éste último, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.5, párrafo segundo de la propia Ley 30/1984.*

*Se hace preciso, en consecuencia, cohonestar las atribuciones conferidas a la Junta Superior de Personal en la Ley 9/1987 con la protección otorgada a los datos de carácter personal, regulada en la Ley Orgánica 15/1999, y con los límites previstos en el artículo 21 para la posible cesión de esos datos.*

*Pues bien, a nuestro juicio, la función de vigilancia y protección de las condiciones de trabajo, atribuida a las Juntas de Personal por la Ley 9/1987 puede llevarse a adecuado desarrollo sin necesidad de proceder a una cesión masiva de los datos referentes al personal que presta sus servicios en el Órgano o Dependencia correspondiente. Sólo en el supuesto en que la vigilancia o control se refieran a un sujeto concreto, que haya planteado la correspondiente queja ante la Junta de Personal, será posible la cesión del dato específico de dicha persona.*

*En los demás supuestos, la función de control quedará plenamente satisfecha, a nuestro juicio, mediante la cesión a la Junta de Personal de información debidamente disociada, según el procedimiento definido en el artículo 3 f) de la Ley Orgánica 15/1999, que permita a aquélla conocer las circunstancias cuya vigilancia le ha sido encomendada sin referenciar la información en un sujeto concreto.*

*En consecuencia, procederá, en caso de haber sido formalmente solicitada, la cesión de los datos solicitados, siempre que los mismos sean cedidos de forma disociada, sin poder referenciar los datos a personas identificadas o identificables. En caso contrario, deberá recabarse el consentimiento de los interesados, conforme exigen los artículos 11 y 21 de la Ley Orgánica 15/1999.*

*Lo anteriormente indicado únicamente quedará exceptuado en lo referente al complemento de productividad, respecto del cual debe recordarse que el artículo 23.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tras definir en su apartado c) el citado complemento, indica en el último párrafo de este apartado que “en todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás*

*funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales”.*

Además, debe recordarse que, en caso de que la cesión tuviera cabida por la condición de representativo del Sindicato consultante, el mismo deberá respetar los principios consagrados en la Ley Orgánica 15/1999, no pudiendo utilizar los datos para funciones distintas de las propias de las facultades de control que la Ley les atribuye. Así, por ejemplo, no podrán utilizar los datos para el ejercicio de sus derechos en juicio, a menos que los mismos sean reclamados al responsable del fichero por el Órgano Jurisdiccional que estuviera conociendo de la reclamación, supuesto en que la cesión tendría cobertura en lo previsto en el artículo 11.2 d) de la Ley Orgánica.